

Trabajo Fin de Grado

Las funciones procesales del Letrado de la Administración de Justicia

Autor

David Arregui Aparicio

Director

Javier López Sánchez

Facultad de Derecho

2016

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN	4
1. CUESTIÓN TRATADA EN EL TRABAJO DE FIN DE GRADO	4
2. RAZÓN DE LA ELECCIÓN DEL TEMA	4
3. METODOLOGÍA SEGUIDA EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO	5
II. FIGURA DEL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	5
III. NUEVA OFICINA JUDICIAL	6
1. BREVE REFERENCIA HISTÓRICA E IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA OFICINA JUDICIAL	6
2. FUNCIONES GENÉRICAS DEL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA OTORGADAS POR LA LOPJ	8
2.1 Titulares de la fe pública judicial	8
2.2 Funciones jurídico procesales	9
2.3 Funciones técnico procesales	10
2.4 Directores de la oficina judicial	10
3 NUEVAS FUNCIONES DEL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA TRAS LA LEY 13/2009	11
3.1 Tras la reforma de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil: Materia de tramitación	12
A) Admisión de la demanda	12
B) Decisiones que acogen actos dispositivos de las partes	13
3.2 Tras la reforma de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil: Materia de ejecución	14
A) Despacho de ejecución	15
B) Medidas ejecutivas	15
C) Cuestiones incidentales	16
D) Terminación del proceso de ejecución	17
E) Vía de apremio	17

3.3 Tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882	18
A) Comunicación y gestión procesal	18
B) Nuevas facultades en el proceso penal	19
C) Ejecuciones y embargos	21
3.4 Director de los Servicios Comunes Procesales	21
A) Servicio Común General	22
B) Servicio Común de Ordenación del Procedimiento	22
C) Servicio Común de Ejecución	22
IV. CONTROVERSIA ANTE LAS NUEVAS FUNCIONES DEL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA COMO CONSECUENCIA DE LA IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA OFICINA JUDICIAL	23
1. AGENDA DE SEÑALAMIENTOS	27
2. ADMISIÓN E INADMISIÓN DE DEMANDAS	30
3. POSIBILIDAD DE DICTAR RESOLUCIONES SIN POSTERIOR RECURSOS	32
V. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES	36
VI. BIBLIOGRAFÍA	39

I. INTRODUCCIÓN

1. CUESTIÓN TRATADA EN EL TRABAJO DE FIN DE GRADO

Este trabajo de fin de grado tiene por finalidad abordar la posición y las funciones que en la actualidad ostenta el recientemente denominado Letrado de la Administración de Justicia, incluyendo aquellas que vienen desarrollando desde tiempo atrás como las que les han sido atribuidas en los últimos años por la implantación de la nueva oficina judicial.

2. RAZÓN DE LA ELECCIÓN DEL TEMA

La elección del citado tema de trabajo radica en tratar de llevar a cabo una síntesis de las numerosas funciones procesales que los Letrados de la Administración de Justicia llevan a cabo en la actualidad.

Este tema adquiere mayor importancia ya que, en los últimos años, incluso meses, han tenido lugar ciertos acontecimientos que han supuesto un gran cambio en la manera en la que los Letrados de la Administración de Justicia participan en el órgano judicial (pasando a hacerlo de un modo más intenso), debido a la modificación de la oficina judicial por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 8/1985 del Poder Judicial (en lo sucesivo LO 19/2003) y la ulterior regulación para que se pudiera realizar su efectiva implantación, en virtud de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial (en lo sucesivo Ley 13/2009).

Ello ha hecho que las competencias de esta figura dentro del órgano judicial hayan aumentado considerablemente, abriéndose un amplio debate sobre si algunas de esas nuevas funciones le otorgan al Letrado de la Administración de Justicia participación en la potestad jurisdiccional que venía siguiendo exclusiva de los Jueces, como recoge el artículo 117.3 CE. Ello se detallará de una forma más práctica, aludiendo y explicando la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 58/2016, de 17 de marzo, en la que se aborda el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de exclusividad de la potestad jurisdiccional, en cuanto a la nulidad de un precepto legal que excluye la intervención judicial en la revisión de las diligencias de ordenación dictadas por el Letrado de la Administración de Justicia.

Es necesario reseñar en esta introducción que rebasa mis posibilidades la posibilidad de la construcción de las teorías de lo jurisdiccional. Simplemente, lo que se desea con este trabajo es hacer un análisis de la reforma, exponiendo la postura de la doctrina y una valoración personal que no pueden ser definitivas.

3. METODOLOGÍA SEGUIDA EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO

En lo que respecta a las fuentes a las que he acudido para abordar esta materia, he partido de la lectura u análisis de la regulación que ha sido objeto del trabajo, es decir, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la Ley Orgánica de 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial y el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Asimismo, he examinado diversos capítulos de libros especializados y artículos en revistas de esta disciplina y, junto a ello, también he recurrido a pronunciamientos jurisprudenciales, todo lo cual aparece detallado en la bibliografía.

II. FIGURA DEL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Debido a la reciente reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, operada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE de 22 de julio de 2015) los secretarios judiciales pasan a ser Letrados de la Administración de Justicia.

Con este acto, aparentemente formal, se pone fin a un largo periodo de tiempo que se puede extender a ciento cuarenta y cinco años atrás, momento en el cual nuestro ordenamiento jurídico asomó la denominación de Secretario para identificar a los fedatarios judiciales en la LOPJ de 15 de septiembre de 1870, ya que anteriormente se les denominaba relatores y escribanos de cámara.¹

En cuanto a su figura, el artículo 440 de la citada LOPJ afirma que: *«Los Letrados de la Administración de Justicia son funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico, único, de carácter nacional, al servicio de la Administración de Justicia,*

¹ ESTARÁN PEIX, J.A., *El nombre de marras: De Secretarios a Letrados*, 2015, p. 1.

dependiente del Ministerio de Justicia, y que ejercen sus funciones con el carácter de autoridad, ostentando la dirección de la Oficina judicial».

Su función histórica más importante ha sido la de la fe pública judicial mediante la cual se puede garantizar la veracidad de las actuaciones judiciales. Sin embargo, sus competencias se han ido incrementado, paulatinamente, hasta pasar a desempeñar un papel fundamental en la Administración de Justicia dentro de la denominada nueva oficina judicial (como se detallará más adelante) llevando a cabo tanto funciones procesales, dictando decretos y diligencias de ordenación en los distintos procedimientos, como funciones directivas propias de la organización de la oficina judicial.

III. NUEVA OFICINA JUDICIAL

1. BREVE REFERENCIA HISTÓRICA E IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA OFICINA JUDICIAL

El descontento con la Administración de Justicia de los distintos colectivos de profesionales por el mal funcionamiento de la misma, la escasez de medios personales y materiales para hacer frente al incremento de la carga de trabajo, así como el malestar de los ciudadanos hacia la Justicia parecía evidente y no hacía otra cosa que constatar que España no poseía un modelo de Oficina válido, siendo el existente eminentemente rural y desfasado para el siglo XXI.

Ello desembocó en la redacción de la importantísima LO 19/2003 que se puede entender como el inicio del final para la modernización de la Justicia en España ya que ha sido resultado de un arduo proceso. Siendo así, la necesidad de un cambio se puso de relieve por las principales fuerzas políticas en el Pacto de Estado para la reforma de la Justicia², suscrito el 28 de mayo de 2001, en el que se sentaron las bases de un nuevo modelo de oficina judicial. *«Que la Justicia actúe con rapidez, eficacia, y calidad, con métodos más modernos y procedimientos menos complicados. Que cumpla satisfactoriamente su función constitucional de garantizar en tiempo razonable los derechos de los ciudadanos y de proporcionar seguridad jurídica, al actuar con pautas de comportamiento y decisión previsibles. Que actúe como poder independiente, unitario e integrado, con una*

² El Pacto de Estado para la reforma de la Justicia, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2002, pp. 273-282.

estructura vertebrada, regida por una coherencia institucional que le permita desarrollar más eficazmente sus funciones constitucionales».

Entonces, analizando el nuevo modelo de la Oficina Judicial se puede constatar que se intentaba implantar una estructura organizativa moderna, ágil y eficaz, basada en la optimización de los recursos personales y materiales y en una apuesta decidida por la incorporación de las nuevas tecnologías, que permitiesen dar un mejor y más rápido servicio al ciudadano que demandase la tutela judicial, atribuyendo la Juez la única tarea que le es propia en el ejercicio de la Jurisdicción: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

Curiosamente, tan importante renovación, se lleva a cabo mediante una regulación estructural desarrollada en tan solo cuatro preceptos (artículos 435 a 438 LOPJ) en virtud del proyecto de la estructura organizativa de la nueva oficina judicial aprobado por el Ministerio de Justicia en 2005³. Regulación escueta e insuficiente a todas luces, para la implantación de la nueva Oficina Judicial fue necesaria la modificación de 14 leyes procesales, lo que se llevó a cabo por la Ley 13/2009.

En la propia Exposición de Motivos de la citada Ley se hace referencia a la necesidad de descargar a los Jueces y Magistrados de todas aquellas tareas no vinculadas estrictamente a las funciones constitucionales para que dediquen todos sus esfuerzos a sus funciones principales: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, atribuyendo a otros funcionarios aquellas responsabilidades y funciones que no tienen carácter jurisdiccional (este punto será extensamente debatido en la segunda parte del presente trabajo) destacando el papel de primer orden que jugarán los integrantes del Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia.

Sin embargo, hay quien mantiene que la Ley 13/2009 nada tiene que ver con el diseño de la Oficina Judicial que recoge la LO 19/2003, entendiendo que no es más que un paso previo, necesario, pero ajeno a las unidades procesales de apoyo directo y a los servicios comunes. Por ello, otros autores, como Alberto Martínez de Santos, que hablan de la existencia de dos caminos paralelos que no tienen por qué coincidir: por un lado, la reforma procesal que pretende la separación de funciones entre Jueces y Letrados de la

³ MARTÍNEZ PARDO, V.J., *La Nueva Oficina Judicial*, Revista Internauta de Práctica Jurídica, Núm 25, 2010, p. 7.

Administración de Justicia y, por otro, la implantación de la Nueva Oficina Judicial que alude a la colaboración y la cooperación de aquellos.⁴

2 FUNCIONES GENÉRICAS DEL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA OTORGADAS POR LA LOPJ

Como se ha ido detallando previamente la figura del Letrado de la Administración de Justicia es esencial y clave para el funcionamiento de la nueva Oficina Judicial. Las funciones que llevan a cabo en los procedimientos judiciales se pueden dividir en cuatro grupos (funciones relacionadas con la fe pública judicial, funciones jurídico procesales, funciones técnico procesales y funciones de dirección de la Oficina Judicial).⁵

2.1 Titulares de la fe pública judicial

Como se ha dicho en la introducción, históricamente, de entre todas las funciones que desarrolla, esta es la más característica. El Letrado de la Administración de Justicia ejerce esta función con autonomía e independencia (equiparable a los Jueces y Magistrados en la función jurisdiccional), sin necesidad de intervención adicional de testigos y sin posibilidad de delegación, habilitación o asunción. La importancia de la fe pública reside en la necesidad de constituir un documento público tal que haga que no se pueda discutir lo actuado en un proceso. Esta función supone:

1.- Dejar constancia fehaciente de la realización de actos procesales en el tribunal o ante sí mismos y de la producción de hechos con trascendencia procesal mediante las oportunas actas y diligencias, así como, cuando se utilicen medios técnicos de grabación o reproducción, garantizar la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido, tal y como dice el artículo 453.1 LOPJ.

2.- En virtud del artículo 453.2 LOPJ, es el Letrado de la Administración de Justicia quien se ocupa de la expedición de certificaciones o testimonios de las actuaciones judiciales no declaradas secretas ni reservadas a las partes, con expresión de su destinatario y el fin para el cual se solicitan.

⁴ MARTÍNEZ DE SANTOS, A., *Dos caminos paralelos que se confunden: la reforma procesal y la de la Oficina Judicial*, Diario de la Ley, N° 7457, 2010, p. 3.

⁵ GARRIDO CARRILLO, F., *Claves de la modernización de la justicia en España*, Agenda Internacional. Año XIV, N°25, 2007, p. 253.

3.- Autorizar y documentar el otorgamiento de poderes para pleitos, en los términos establecidos en las leyes procesales, según establece el art. 453.3 LOPJ.

4.- También es competencia del Letrado de la Administración de Justicia, la formación de los autos y expedientes, dejando constancia de las resoluciones que dicten los jueces y magistrados, o ellos mismos cuando así lo autorice la ley, tal y como versa el artículo 454.1 LOPJ.

2.2 Funciones jurídico procesales

Son aquellas funciones por las que el Letrado de la Administración de Justicia desarrolla actividades necesarias dentro de los distintos procedimientos judiciales apoyándose en los textos legales vigentes reguladores de trámites ante Juzgados y Tribunales. Dentro de esta categoría se pueden encuadrar las distintas actuaciones:

1.- Llevan a cabo la denominada dación en cuenta, en virtud del artículo 455 LOPJ. Dicha actuación implica poner, de inmediato, conocimiento de la Sala, del Ponente o del Juez, los escritos y documentos presentados, así como las actas que se hubieren autorizado fuera de la presencia judicial, y el transcurso de los plazos procesales, el consiguiente estado de los autos, y, finalmente, de las diligencias de ordenación que se hubieren dictado.

2.- Como se ha anticipado antes, corresponde a los Letrados de la Administración de Justicia llevar a cabo la función de documentación de las actuaciones. Por ello, el ya citado artículo 454.1 LOPJ establece que serán ellos los que realicen la formación de los autos y expedientes, dejando constancia de las resoluciones que dicten los jueces y magistrados, o ellos mismos cuando así lo autorice la ley.

3.- También ostenta funciones relativas al impulso del proceso en los términos que establezcan las leyes procesales. A tal efecto, dictará las resoluciones (se denominarán diligencias y podrán ser de ordenación, de constancia, de comunicación o de ejecución) necesarias para la tramitación del proceso, salvo aquéllas que las leyes procesales reserven a Jueces o Tribunales. Ello se encuentra recogido en el artículo 456.1 y 2 LOPJ.

4.- El artículo 456.3 LOPJ les dota, además, de competencias en materia de ejecución, Así pues, cuando así lo prevean las leyes procesales, podrán dictar decretos en materias como la relativa a la ejecución, jurisdicción voluntaria, conciliación, mediación.

2.3 Funciones técnico procesales

Son aquellas funciones que, al igual que las funciones jurídico procesales, son necesarias a lo largo de los procedimientos judiciales, pero que su desarrollo han de estar a lo establecido en otro tipo de normativa, incluso de régimen interior (normas de reparto, cumplimiento de órdenes del superior jerárquico) o incluso, al mero sentido común, ya que la naturaleza y la finalidad de las mismas así lo permite. Se incluyen las siguientes:

- 1.- Tal y como recoge el artículo 454.3 LOPJ, garantizan que el reparto de asuntos se realiza de conformidad con las normas que a tal efecto aprueben las Salas de Gobierno de los Tribunales de Justicia, y responden del buen funcionamiento del registro de recepción de documentos.
- 2.- Deben facilitar a las partes interesadas y a cuantos manifiesten y justifiquen un interés legítimo y directo, la información que soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales no declaradas secretas ni reservadas, tal y como recoge el artículo 454.4 LOPJ.
- 3.- Tienen que ocuparse de, como establece el artículo 454.5 LOPJ, promover el empleo de los medios técnicos, audiovisuales e informáticos de documentación.
- 4.- Son responsables de diferentes actuaciones que, si bien no parecen tener incidencia jurídica, son de gran importancia para el perfecto desarrollo de un Juzgado, entre las que destacan las siguientes: Llevanza del archivo Judicial de Gestión (artículo 458.1 LOPJ); llevanza de los libros de registro (artículo 458.4 LOPJ); también son los responsables del depósito de los bienes y objetos afectos a los expedientes judiciales, así como del de las piezas de convicción en las causas penales (artículo 459.1 LOPJ), así como de cuantas cantidades, consignaciones y fianzas se produzcan (artículo 459.2 LOPJ).

2.4 Directores de la oficina judicial

Corresponde a los Letrados de la Administración de Justicia la dirección de la oficina judicial. Para ello deben ordenar la actividad de la misma e impartir las órdenes e instrucciones que se estimen pertinentes para que su desarrollo sea óptima y correcto. Dicha función la recoge el artículo 457 LOPJ y hace referencia, entre otras funciones a las siguientes:

- 1.- El Letrado de la Administración de Justicia tiene que ejercer la jefatura de los integrantes de los Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio, ordenando el trabajo de sus integrantes, impartiendo las órdenes e instrucciones pertinentes y, respondiendo de su buen funcionamiento.
- 2.- Deben ser oídos, verbalmente o por escrito, por el organismo correspondiente del Ministerio de Justicia o de las Comunidades Autónomas con competencias, antes de resolver cualquier solicitud del personal de la oficina.
- 3.- Ponen en conocimiento de la autoridad competente las necesidades de medios personales y materiales indispensables para el funcionamiento de la oficina y dirigen a dicha autoridad competente las propuestas que estime adecuadas a la reorganización, redistribución de efectivos o creación de servicios comunes.
- 4.- También tienen que ocuparse de poner en conocimiento de la autoridad competente, sin necesidad de autorización previa, los hechos que pudieran motivar expediente disciplinario o causa penal por hechos realizados, en el ejercicio de su función, por los integrantes de la oficina judicial.

3 NUEVAS FUNCIONES DEL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA TRAS LA LEY 13/2009

Citadas las competencias de los Letrados de la Administración de Justicia desde una perspectiva genérica, es importante destacar que, como se ha venido diciendo anteriormente, sus funciones han venido a ser ampliadas en los últimos años como consecuencia de la redacción de la Ley 13/2009 necesaria para hacer efectiva la implantación de la nueva Oficina Judicial.

Así pues, en el presente trabajo nos limitaremos a abordar la ampliación de funciones en el ámbito civil y penal, prescindiendo de la correspondiente al proceso laboral y contencioso-administrativo, dado el carácter supletorio de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se establece en su artículo 4. Por tanto, el análisis se centrará en la tramitación y ejecución (de forma separada) en el procedimiento civil, en el proceso penal, así como una breve explicación del papel del Letrado de la Administración de Justicia como director de la Oficina Judicial.

En este punto es importante decir que, como se ha señalado anteriormente, para la reforma tanto de la LEC como de la LECrim fue necesaria la promulgación de la Ley 13/2009 y son sus artículos 15 y 2 (a lo largo de sus numerosos apartados), los que permitieron la reforma de la LEC y de la LECrim respectivamente.

3.1 Tras la reforma de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil: Tramitación

Antes de entrar sobre el fondo de los dos puntos más controvertidos en materia de tramitación del procedimiento civil en relación al aumento de las funciones al Secretario Judicial como son la admisión de la demanda y decisiones que acogen actos dispositivos de las partes, es necesario hacer un pequeño inciso sobre las resoluciones procesales del mismo y los recursos que cabrían contra las mismas. La LEC distingue las diligencias de ordenación de los decretos, como recogen los artículos 206 y 208 LEC:

Mientras las diligencias de ordenación tienen por objeto dar a los autos el curso que la ley establece, los decretos tienen por objeto la admisión a trámite de la demanda, dar por terminado el procedimiento o, cuando fuere preciso o conveniente, razonarlos. Estos decretos serán razonados de forma similar a los autos de los Jueces y Magistrados. Por tanto, como veremos a continuación, los decretos pasan a ser muy importantes y objeto de debate, debido a los recientes cambios.

En cuanto a los recursos que caben contra estas resoluciones, se puede realizar el siguiente esquema:

- Cabe recurso de reposición, tal y como recoge el artículo 451 LEC, frente a las diligencias de ordenación y decretos no definitivos, excepto cuando se prevea directamente el recurso de revisión y frente a las providencias y autos no definitivos.
- Se podrá interponer recurso de revisión frente a los decretos por los que se ponga fin al procedimiento o impidan su continuación y en aquellos otros casos en que expresamente se prevea, en virtud del artículo art. 454 bis LEC.

A) Admisión de la demanda

Junto con el proceso de ejecución, es en el procedimiento para la admisión a trámite de la demanda donde más notable ha sido el cambio en la sustanciación de los procesos al tener lugar la asunción de competencias para resolver la admisión a trámite de la demanda por parte del Secretario Judicial, lo que le obliga a analizar las circunstancias relacionadas

a ello (jurisdicción, competencia objetiva o territorial, legitimación y capacidad procesal de las partes, postulación procesal, acumulación de acciones). Los dos puntos más relevantes son la admisión a trámite y el traslado de la demanda y el señalamiento de juicio:

1.- En cuanto a la admisión a trámite y traslado de la demanda, el artículo 404.1 LEC establece que será el Letrado de la Administración de Justicia, una vez examinada la demanda, quien dictará decreto admitiendo la misma y dará traslado de ella al demandado para que la conteste en el plazo de veinte días.

2.- Además, en virtud del artículo 440.1 LEC, el Letrado de la Administración de Justicia citará a las partes para la celebración de vista en el día y hora que a tal efecto señale, debiendo mediar diez días, al menos, desde el siguiente a la citación y sin que puedan exceder de veinte.

Sin embargo, es importante destacar que la inadmisión a la demanda no pasa a ser competencia del Letrado de la Administración de Justicia por el posible riesgo de vulnerar el derecho de acceso a la Justicia que se integra en el derecho a una tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24 CE. Además, hay que reseñar que también se reserva la admisión de la demanda al Juez en los casos de demanda ejecutiva (artículo 551 LEC) y de juicio cambiario (artículo 821 LEC) ya que dichas actuaciones enjuician el valor del título o de la letra de cambio.

Se puede incluir en este epígrafe la atribución al Letrado de la Administración de Justicia de la admisión de la solicitud y la tramitación del proceso monitorio, siguiendo el modelo alemán. En función del artículo 813 LEC será exclusivamente competente para el proceso monitorio el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o residencia del deudor o, si no fueren conocidos, el del lugar en que el deudor pudiera ser hallado a efectos del requerimiento de pago por el Tribunal.

Sin embargo, la Ley 13/2009 reconoce la asunción, por el Letrado de la Administración de Justicia, de las competencias sobre admisión de este proceso que hasta ahora venían siendo del Juez de Primera Instancia, manteniéndose el régimen general introducido con la reforma para en los casos en que aquél estime que no procede admitir la demanda por cualquier circunstancia.

B) Decisiones que acogen actos dispositivos de las partes

Son figuras que tratan de reconocer el poder que tienen las partes para manejar algunos tiempos y sobre ciertas decisiones relativas la conclusión del proceso. Con las últimas reformas, algunas de ellas han pasado a estar en manos del Letrado de la Administración de Justicia ya que parece lógico que pueda ser él y no necesariamente el Juez quien ponga fin a un procedimiento en el que existe una falta de actividad de las partes o cuando exista acuerdo entre las mismas. Destacan las siguientes actuaciones:

1.- La suspensión del proceso que, en virtud del artículo 19.4 LEC será acordada por el Letrado de la Administración de Justicia mediante decreto siempre que no perjudique al interés general o a tercero.

2.- También será el Letrado de la Administración de Justicia quien dictará decreto acordando el sobreseimiento, siempre que el demandado prestare su conformidad al desistimiento o no se opusiere a él, tal y como recoge el artículo 20.3 LEC.

3.- En cuanto a la satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto, hay que destacar que el artículo 22.1 LEC establece que, cuando, por circunstancias sobrevenidas a la demanda y a la reconvención, dejare de haber interés legítimo en obtener la tutela judicial pretendida, se pondrá de manifiesto esta circunstancia y, si hubiere acuerdo de las partes, se decretará por el Letrado de la Administración de Justicia la terminación del proceso, sin que proceda condena en costas.

4.- También se le han encomendado facultades en materia de enervación de acciones, actuación que supone la conclusión del procedimiento sin que por ello se vea alterada la relación o negocio jurídico existente entre las partes, por lo que puede entenderse como un contraderecho. A este respecto, el artículo 22.4 LEC establece que los procesos de desahucio de finca urbana o rústica por falta de pago de las rentas o cantidades debidas por el arrendatario terminarán mediante decreto dictado por el Letrado de la Administración de Justicia si, antes de la celebración de la vista, el arrendatario paga al actor o pone a su disposición en el Tribunal o notarialmente el importe de las cantidades reclamadas en la demanda y el de las que adeude en el momento de dicho pago enervador del desahucio.

3.2 Tras la reforma de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil: Ejecución

También se han introducido importantes novedades en materia de ejecución, ya que se parte de la premisa que el proceso de ejecución pasa a ser responsabilidad, casi en su

integridad, del Letrado de la Administración de Justicia. Así, quedan bajo decisión judicial la orden general de ejecución y a la resolución de los recursos que a lo largo de este proceso puedan plantearse. Aunque de forma pormenorizada, se atenderá a todos los aspectos que rodean el despacho de ejecución, la concreta adopción de medidas ejecutivas y las más importantes cuestiones incidentales que pueden suscitarse durante la sustanciación de este proceso.

A) Despacho de ejecución

Sin duda una de las más relevantes novedades introducidas en nuestro ordenamiento procesal a través de la Ley 13/2009 es la sustanciación del proceso de ejecución.

Al contrario de lo que se ha expuesto con anterioridad relativo a la admisión de la demanda por parte del Letrado de la Administración de Justicia, hay que reseñar que ello no ocurre en las demandas ejecutivas, en las cuales es el juez o tribunal competente quien dictará auto conteniendo la orden general previo estudio y aceptación de aquellas exigencias legales tal y como recoge el artículo 551.1 LEC.

Sin embargo, sí que se le otorga al Letrado de la Administración de Justicia, la facultad de dictar decreto dando curso a la ejecución, ya que el artículo 551.3 LEC establece que, dictada la resolución por el Juez o Tribunal, será competencia del Letrado de la Administración de Justicia dictar decreto que contenga la concreción de los bienes del ejecutado a los que ha de extenderse el despacho de la ejecución, la adopción de todas las medidas necesarias para la efectividad del despacho y ordenando los medios de averiguación patrimonial que fueran necesarios, así como las medidas ejecutivas concretas que procedan.

B) Medidas ejecutivas

Como se acaba de decir, en el pertinente decreto en virtud del cual se lleva a cabo el despacho de la ejecución, el Letrado de la Administración de Justicia debe incluir las medidas ejecutivas concretas que resultaren procedentes, incluido si fuera necesario el embargo de bienes.

Sin entrar a valorar medidas concretas hay que destacar que, para asegurar la efectividad de estas medidas, el Letrado de la Administración de Justicia puede requerir al ejecutado que manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes que cubran la cuantía de la ejecución, y puede, incluso, imponer multas coercitivas periódicas al ejecutado que no responda debidamente al requerimiento.

En el caso de embargo, entendiendo como tal la medida (ejecutiva o preventiva) más empleada para asegurar las responsabilidades reclamadas al deudor, hay que resaltar que la reforma de la Ley 1/2000 en virtud de la Ley 13/2009, se ha introducido una novedad con respecto a la figura del Letrado de la Administración de Justicia, ya que el artículo 587.1 LEC fija que el embargo se entenderá hecho desde que se decreta por Letrado de la Administración de Justicia o se reseñe la descripción de un bien en el acta de la diligencia de embargo, aunque no se hayan adoptado aún medidas de garantía o publicidad de la traba.

C) Cuestiones incidentales

Conforme a dispuesto en el art. 387 LEC, son cuestiones incidentales las que, siendo distintas de las que constituyan el objeto principal del pleito, guarden con éste relación inmediata, así como las que se suscitan respecto de presupuestos y requisitos procesales de influencia en el proceso. En un sentido aún más amplio, quedan comprendidas también aquí aquéllas que, de uno u otro modo, afectan al desarrollo del proceso de ejecución y a pronunciamientos que, sin alterar el contenido del despacho de la misma, se encaminan a favorecer la plena satisfacción del derecho ejercitado por el actor.

Al igual que ha ocurrido con las actuaciones previamente explicadas, las nuevas reformas derivadas a favorecer la implantación de la nueva oficina judicial, ha hecho que la participación del Letrado de la Administración de Justicia se aumente ya que, a lo largo del procedimiento civil, actúa activamente, entre otras, en las siguientes actuaciones:

1.- Tasación de costas: En virtud del artículo 241.1 LEC se consideran costas la parte de los gastos derivados de un proceso que tienen que ver, entre otros, con honorarios de la defensa la representación, anuncios o edictos publicados, depósitos necesarios para la presentación de recursos, derechos de peritos, copias, certificaciones, notas, testimonios...

Así pues, el artículo 243.1 LEC establece que, en todo tipo de procesos e instancias, la tasación de costas se practicará por el Letrado de la Administración de Justicia que hubiera conocido del proceso o recurso, respectivamente, o, en su caso, por el encargado de la ejecución. También le corresponde al Letrado de la Administración de Justicia aprobar la tasación de costas mediante decreto cuando haya transcurrido el plazo establecido, tal como recoge el artículo 244.3 LEC, así como mantenerla o introducir las modificaciones que estime oportunas (artículos 246.3 y 4 LEC).

2.- Liquidación de daños y perjuicios, es decir, la liquidación de intereses: La novedad introducida en esta materia con respecto a la figura del Letrado de la Administración de Justicia es que pasa a ser él quien dé traslado del escrito y de la relación de daños y perjuicios a quien hubiere de abonar los daños y perjuicios, para que, en el plazo de diez días, conteste lo que estime conveniente, tal y como recoge el artículo 713.2 LEC.

En este punto, si el deudor se conforma con la relación de los daños y perjuicios y su importe, la aprobará el Letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución mediante decreto, y se procederá a hacer efectiva la suma convenida. Mientras que, si el deudor se opusiera motivadamente a la petición del actor, se sustanciará la liquidación de daños y perjuicios por los trámites establecidos para los juicios verbales, para lo cual señalará día para la vista que se celebrará ante el juez o tribunal que dictó la orden general de ejecución.

3.- El Letrado de la Administración de Justicia, también asume competencias en materia de acumulación de proceso de ejecución entre el mismo acreedor ejecutante y el mismo deudor ejecutado ya que, si antes de la reforma la acumulación de procesos solo era posible a iniciativa de parte, a partir de ahora también él la podrá acordar (artículo 555.1 LEC).

4.- Tercerías: Las tercerías de dominio y de mejor derecho constituyen también incidentes que, con cierta asiduidad, se plantean en el curso de la ejecución. Esta actuación tiene carácter preventivo y está reconocido en el artículo 593.2 LEC que dice que, cuando por percepción directa o por manifestaciones del ejecutado o de otras personas, el Letrado de la Administración de Justicia tuviera motivos racionales para entender que los bienes que se propone trabar pueden pertenecer a un tercero, ordenará mediante diligencia de ordenación que se le haga saber la inminencia de la traba.

D) Terminación del proceso de ejecución

Hasta la promulgación de la Ley 13/2009, el art. 570 LEC indicaba que la ejecución forzosa sólo terminará con la completa satisfacción del acreedor ejecutante. Ahora añade, además, que dicha terminación se acordará por decreto del Letrado de la Administración de Justicia, contra el cual podrá interponerse recurso directo de revisión.

E) Vía de apremio

También es reseñable la actuación del Letrado de la Administración de Justicia en materia de vía de apremio. Sin embargo, se escapa al objetivo y a la capacidad de este trabajo el

análisis de sus facultades. En cualquier caso, cabría destacar su papel en relación a garantías de embargo de dinero (artículo 621.2 LEC), de bienes inmuebles (artículo 629.1 LEC), administración judicial (artículo 361.1 LEC), o valoración de bienes embargados (artículo 638.1 LEC).

3.3 Tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882

El análisis de los cambios derivados en el proceso penal debidos a las reformas para la implantación de la nueva oficina judicial se van a centrar en tres puntos. Por un lado, las modificaciones organizativas que hacen que se distribuyan más claramente tareas y responsabilidad entre el Juez y el Letrado de la Administración de Justicia. Por otro, las nuevas facultades del mismo en el citado proceso penal. Finalmente, el desarrollo de las ejecuciones y embargo en el mismo.

De forma previa, es importante destacar que las resoluciones procesales del Letrado de la Administración de Justicia son las mismas que en el proceso civil, tal y como recoge el artículo 144 bis LECrim. Es decir, de un lado las diligencias de ordenación que tienen por objeto dar a los autos el curso que la Ley establezca y de otro los decretos se dictarán cuando sea preciso o conveniente razonar su decisión.

En cuanto a los recursos, también se establecen los mismos que en el proceso civil (artículos 238 bis y ter LECrim):

- De reposición ante el Letrado de la Administración de Justicia contra las diligencias de ordenación y los decretos, excepto en los casos en que proceda recurso de revisión según la Ley. Contra el decreto del Secretario Judicial, resolutorio del recurso, no cabe recurso alguno.
- De revisión ante el Juez o Tribunal, que resolverán por auto, contra el que no cabrá recurso alguno.

A) Comunicación y gestión procesal

Los Letrados de la Administración de Justicia pasan a ostentar importantes competencias en materia de comunicación fuera del Juzgado o Tribunal, con otras Administraciones o con los colegios de abogados y procuradores, en materia de gestión procesal, así como también en lo que atañe a la tramitación de recursos.

1.- Debe llevar a cabo los actos de comunicación: Uno de los pilares de la reforma es la concentración de la gestión procesal en los servicios comunes, lo que permitirá racionalizar el trabajo de los empleados públicos y mejorar el rendimiento y la calidad del servicio, con lo que se favorece la mejor satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva. En este sentido, se modifica el artículo 166 LECrim para establecer el principio de que los actos de comunicación se realizarán bajo la dirección del Letrado de la Administración de Justicia.

2.- Las diligencias ante otras Administraciones pasan a ser competencia del Letrado de la Administración de Justicia, siendo esta una tarea que tiene especiales manifestaciones en el ámbito penal, en la medida en que le encomiendan labores de importancia significativa para la instrucción de los delitos.

Un ejemplo en el que se pone de manifiesto es la averiguación de domicilios, ya que el artículo 432 LECrim establece que, si el testigo no tuviere domicilio conocido o se ignorare su paradero, el Juez instructor ordenará lo conveniente para la averiguación del mismo. En este caso el Letrado de la Administración de Justicia se dirigirá a la Policía Judicial, Registros oficiales, colegios profesionales, entidad o empresas en el que el interesado ejerza su actividad interesando dicha averiguación.

3.- Comunicaciones con los Colegios de abogados y procuradores: También es competencia del Letrado de la Administración de Justicia interesar cuando corresponda el nombramiento de abogado y procurador de oficio. Igualmente, en casos de inasistencia injustificada de los defensores, deberá comunicarlo al colegio a efectos de responsabilidad disciplinaria.

4.- Además de todo ello, también va a tener cierta incidencia en la llevanza de la gestión y tramitación procesal: Siguiendo el objetivo principal de racionalizar los recursos disponibles, se ha optado por atribuir las competencias de gestión y tramitación procesal al Letrado de la Administración de Justicia (lo que ya venía siendo práctica habitual en los órganos judiciales) salvo los supuestos en que una toma de decisión procesal pudiera afectar a la función estrictamente jurisdiccional. Un ejemplo de ello es la función de comunicar al fiscal y acusador particular la causa para su calificación provisional tal y como recoge el artículo 651.1º LECrim.

B) Nuevas facultades en el proceso penal

En este apartado se expondrán aquellas actuaciones que, ya sean de forma o de fondo, han sido destinadas al Letrado de la Administración de Justicia, como pueden ser las siguientes:

1.- Debe llevar a cabo la instrucción o información a la víctima u ofendido. Se sigue así la línea establecida por la Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado, que establecía en el artículo 776 el deber del secretario judicial de informar en la primera comparecencia al perjudicado y ofendido de sus derechos.

Es el actual artículo 761.2 LECrim el que recoge esta facultad, determinando que el Letrado de la Administración de Justicia instruirá al ofendido o perjudicado por el delito de los derechos que le asisten conforme a lo dispuesto en los artículos 109 y 110 LECrim y demás disposiciones, pudiendo mostrarse parte en la causa sin necesidad de formular querella.

2.- En cuanto a los objetos del delito, se especifica que es el juez el responsable de los mismos, pero compete al Letrado de la Administración de Justicia extender la diligencia correspondiente. También será él el encargado de las diligencias de valoración y, en su caso, de poner los objetos a disposición del perito, así como, en virtud del artículo.

También será el Letrado de la Administración de Justicia quien, al entregar la causa, disponga lo necesario para que las partes puedan examinar los libros, papeles, objetos etc. Así mismo será su responsabilidad, en virtud de la nueva redacción del artículo 688 LECrim velar por que el día señalado para el comienzo de las sesiones del juicio se encuentren en el local del órgano judicial las piezas de convicción.

3.- Señalamiento de vistas: La novedad de esta actuación es intermedia pues ya la venían ejerciendo los Letrados de la Administración de Justicia en relación con los llamados “juicios rápidos”, pero ahora se opta por extenderlo a todos los procedimientos. Se incluye también la previsión específica de que, en caso de suspensión, se encomienda al secretario el señalamiento de día para el nuevo juicio.

4.- Para complementar la tarea previamente citada, se les atribuye también la designación de ponente por turno. Se introducen las modificaciones oportunas para que los Letrados de la Administración de Justicia de los órganos colegiados puedan designar por sí mismos

al magistrado ponente que por turno corresponda, dándole directamente traslado de la causa.

C) Ejecuciones y embargos

Al igual que se ha hecho en la explicación del procedimiento civil, las reformas han dado lugar a modificaciones en materia de ejecución y embargo dentro del proceso penal que se van a tratar de citar brevemente a continuación.

1.- Un cambio significativo en el proceso penal es el que habilita al Letrado de la Administración de Justicia para llevar a cabo los actos concretos de ejecución de sentencia. Pasa a ser de su competencia la función de impulsar el proceso de ejecución de sentencias, dictando las diligencias necesarias, sin perjuicio de la competencia del Juez o Tribunal para hacer cumplir la pena, en virtud del artículo 990 párrafo 5º LECrim, así como la de información a los ofendidos, perjudicados y testigos de riesgo, de las resoluciones relativas al penado que puedan afectar a su seguridad, tal y como versa el párrafo 6º del citado artículo.

2.- En materia de fianzas y embargos, en la regulación de la libertad provisional del procesado se introducen los cambios necesarios para que sea el Letrado de la Administración de Justicia quien pueda señalar al fiador personal o dueño de los bienes dados en fianza cuando no comparezca el procesado. Igualmente, podrá iniciar la vía de apremio, sustituyéndose la regulación anterior por la remisión a la Ley de Enjuiciamiento Civil.

3.4 Director de los Servicios Comunes Procesales

El modelo de la nueva oficina implantada como consecuencia de la redacción de la LO 19/2003, así como de la ulterior regulación necesaria para su correcto funcionamiento, se configura en torno a tres entes:

1.- Por un lado, están las denominadas unidades procesales de apoyo directo, que asumen la tramitación de todos aquellos asuntos cuyo conocimiento tengan atribuidos legalmente los jueces y tribunales, asistiéndolos mediante la realización de las actuaciones precisas para el eficaz cumplimiento de la función jurisdiccional.

2.- También son muy importantes los servicios comunes procesales, que, sin estar integrados en ningún órgano judicial concreto, asumen labores centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes procesales

3.- Y en tercer lugar se pueden citar las unidades administrativas, que, sin estar incardinadas estrictamente en la oficina judicial, tienen como objetivo la gestión de recursos humanos, materiales, destacando entre éstos últimos los informáticos y de nuevas tecnologías, de los que depende el éxito del nuevo modelo.

De todos ellos, van a ser objeto de estudio los servicios comunes procesales ya que son en los que el Letrado de la Administración de Justicia tiene una participación activa como director de los mismos tal y como recoge el artículo 438.5 LOPJ.

A) Servicio Común General

Bajo la dirección de un Letrado de la Administración de Justicia asume labores centralizadas de gestión y apoyo no encomendadas a otros servicios comunes procesales. Entre los cometidos, encontramos funciones de registro y reparto de demandas, atestadas, denuncias..., actos de comunicación y auxilio judicial, depósito y archivo, atención a profesionales y asistencia a víctimas, estadística, averiguación patrimonial y de domicilio y caja.

B) Servicio Común de Ordenación del Procedimiento

También bajo su dirección, asume la tramitación de los procedimientos en los que no resulte imprescindible la intervención del Juez o Magistrado, quedando la ordenación del procedimiento bajo la competencia de los Letrados de la Administración de Justicia destinados en estos servicios. Realizan funciones de admisión a la demanda, emplazamiento y traslados para contestar, agenda de señalamientos, preparación de pruebas, preparación de diligencias, tramitación de los recursos.

C) Servicio Común de Ejecución

Asume la ejecución de los procedimientos en todos aquellos aspectos en que no resulte imprescindible la intervención del Juez o Magistrado, que, tras la reforma procesal, suponen la mayor parte de los trámites que comprenden la ejecución de los pleitos. Este servicio común también actúa bajo la dirección de un Letrado de la Administración de Justicia.

IV. CONTROVERSIA ANTE LAS NUEVAS FUNCIONES DEL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA COMO CONSECUENCIA DE LA IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA OFICINA JUDICIAL

Como consecuencia de la atribución a los Letrados de la Administración de Justicia de estas nuevas funciones, se ha abierto un intenso debate en el seno judicial en relación a ciertas situaciones concretas como son la llevanza de la agenda de señalamientos o la admisión e inadmisión de la demanda, siendo el tema de fondo la posibilidad de dictar resoluciones sin posterior recurso y su presencia en la potestad jurisdiccional.

Por tanto, se puede afirmar que lo importante es el cambio que se ha producido en la relación del personal jurisdiccional con dicha oficina judicial. En líneas generales se puede decir que mientras antes había una clara identificación entre el órgano judicial y la oficina judicial, en la actualidad, se observa una plausible división entre ambos.

Tanto es así que, se podría llegar a decir que, de una situación en la que los jueces y magistrados eran los titulares del órgano judicial se ha pasado a convertirlos en meros espectadores de las oficinas judiciales (debido a la separación entre estos dos conceptos). Los jueces y magistrados podrán dar directrices sobre el modo en el que deben tramitarse los procedimientos, pero no corregir, por ejemplo, defectos organizativos que dificulten o retrasen la tramitación de los procedimientos⁶.

La separación es tal que hay quien⁷ ha llegado a afirmar, de forma extrema que, de una posición en la que la figura del Juez era esencial, en contraposición a la absoluta accesoriedad del resto de los integrantes del órgano judicial, se ha pasado a la posición contraria, en la que la figura del Juez es accesorio.

Así pues, todo esto no hace más que mostrar que, como consecuencia de este nuevo reparto de funciones, especialmente con el incremento de las mismas en torno a la figura del Letrado de la Administración de Justicia, se ha abierto el debate de la participación o no de este en la potestad jurisdiccional.

Para poder comprender correctamente las distintas opiniones, es necesario concretar ciertos conceptos que a la postre serán imprescindibles, como son oficina judicial,

⁶ Solo les cabrá exponer al Secretario Judicial la conveniencia de corregir los defectos

⁷ GARRIDO CARRILLO, F.J., *Claves de la modernización de la justicia en España*, Agenda Internacional. Año XIV, Nº25, 2007, p. 251.

jurisdicción y Pacto de Estado para la reforma de la Justicia de 2001 en relación con la definición de reforma.

1.- Se define oficina judicial, en virtud del artículo 435 LOPJ, como la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales.

2.- En palabras de Díez-Picazo Giménez se entiende por jurisdicción la funciones estatal consistente en la tutela y la realización del Derecho objetivo, de manera potencialmente irrevocable y a través de órganos que actúan con desinterés objetivo, independencia y sometimiento exclusivo al Derecho sabiendo que el artículo 117.3 de la Constitución Española dice que *«el ejercicio de las potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan»*.

3.- El Pacto de Estado para la reforma de la Justicia⁸ que fue suscrito el 28 de mayo del año 2001 se firmó con la finalidad de plantearse y abordar una modernización del sistema judicial, impulsando un nuevo modelo de Justicia Global que atienda al ciudadano respetando unos postulados básicos de rapidez, eficacia y calidad con los que se consiga garantizar los derechos de los ciudadanos.

Para ello, entre otras medidas, se decide reconducir el desempeño del Letrado de la Administración de Justicia, considerando necesario redefinir sus funciones, atribuyéndoles nuevas competencias, potenciando así su figura.

Puede ser útil relacionar este Pacto de Estado para la reforma de la Justicia con el propio concepto de reforma, que hace referencia a mejorar, renovar, corregir⁹. Así pues, aplicando esta definición y relacionándola con la oficina judicial, difícilmente se puede comprender la reforma de la Justicia sin disminuir competencias jurisdiccionales del Juez para dárselas al Letrado de la Administración de Justicia.

Tomando esto como base, y apoyándose en la que Jesús Seoane Cacharrón¹⁰ denomina como doctrina dominante (Almagro Nosete, Calvo Sánchez, Gimeno Sendra, Martín

⁸ El Pacto de Estado para la reforma de la Justicia, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2002, pp. 273-282.

⁹ MOLINER, M., *Diccionario de uso del español*. Edición abreviada, Gredos, Madrid, 2008

¹⁰ SEOANE CACHARRÓN, J., *El Secretario Judicial ante la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de Reforma de la Legislación Procesal (civil y penal) para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial*, Diario La Ley, Nº 7561, Sección Tribuna, 3 Feb. 2011, p. 1.

Ostos...) puede parecer coherente afirmar que el Letrado de la Administración de Justicia es integrante del órgano jurisdiccional y que los argumentos que le sitúan al margen de dicha esencia no se conectan con la realidad indiscutible de que el órgano judicial no se puede constituir sin la presencia del mismo. Así parece plasmarlo la reforma de la LOPJ tras la LO 19/2003, al integrar al Letrado de la Administración de Justicia en las unidades de apoyo directo y, por tanto, en el respectivo órgano jurisdiccional, tal y como recoge el artículo 437.2 LOPJ.

Por tanto, si forma parte esencial del órgano judicial, lo más conveniente sería entender la figura dentro del núcleo del concepto de Administración de Justicia¹¹. Y, además, con la nueva LOPJ reformada, ya no dependen en su jefatura directa del personal de la Secretaría de la “superior dirección de los jueces y presidentes”¹².

Así pues, centrándonos ya un poco más en la discutida potestad jurisdiccional, hay que destacar que, tal y como recoge, entre otros, Moreno Catena¹³, la misma, en la dimensión constitucional, aunque aparezca diseñada en el art. 117.3 CE, no es exclusiva de los Jueces y Magistrados, ni solo abarca la clásica función decisoria, ya que la jurisdicción se descompone en potestad de decisión de controversias, de ejecución, de documentación y de ordenación, de las cuales solo la primera reside necesariamente en los Jueces y Magistrados, porque esencialmente es la función de administrar Justicia que la Constitución les atribuye (artículo 117.1CE) con exclusividad absoluta, pues la potestad jurisdiccional, en sentido amplio, es otorgada con acertado criterio por el legislador constitucional a los Juzgados y Tribunales y no a los Jueces y Magistrados habida cuenta que el Tribunal es complejo y compuesto por el Juez y el Letrado de la Administración de Justicia.

Ello viene defendiendo también Vicente Gimeno Sendra¹⁴, quien dice que la competencia, como la jurisdicción, «*ni se parte, ni se reparte, se tiene o no se tiene: ni los Jueces asumen competencias, ni han de ejercerlas los Letrados de la Administración de Justicia*». Es decir, el único órgano competente es el Juzgado o Tribunal, que se constituye con el Juez y el Letrado de la Administración de Justicia. Entre ellos no pueden

¹¹ GARRIDO CARRILLO, F.J., *Claves de la modernización de la justicia en España*, Agenda Internacional. Año XIV, N°25, 2007, p. 254.

¹² Así lo establecían los antiguos artículos 473.3 y 484.4 LOPJ

¹³ MORENO CATENA, V., *Introducción al Derecho Procesal*. 4ª Edición. 2003.

¹⁴ GIMENO SENDRA, V., *Análisis crítico del proyecto de Ley de implantación de la Oficina Judicial*, Diario La Ley, N° 7203, Sección Corresponsalía, 24 Jun 2009, p. 1.

existir competencias, ni muchos menos conflictos de competencia, sino tan sólo división del trabajo.

Por su parte, el profesor Asencio Mellado¹⁵ afirma que la ley realiza una asignación a los Letrados de la Administración de Justicia de determinadas competencias en el ámbito del proceso que ostentan carácter jurisdiccional, *«pues lo procesal no deja de serlo cuando tiene efectos materiales incluso fuera del proceso»*. Estima, pues, que la consideración de que las funciones atribuidas al Letrado de la Administración de Justicia no tienen naturaleza jurisdiccional es artificiosa e insuficiente.

Sin embargo, realiza una crítica a la reforma al entender que lo que *«se ha hecho una selección que no ha querido profundizar en la atribución de competencias a los Letrados de la Administración de Justicia, a los que se niega potestad jurisdiccional y se ha rehuido la posibilidad de atribuírsela, con lo que, descartada esta opción, toda la elección de materias no pasa de ser una decisión discrecional, relativa y poco fundada, además de no ser útil para el desarrollo de una figura tan trascendental para el proceso y de, por esta vía, mantener el criterio de dependencia jerárquica»*.

En este punto es importante poner de relieve la postura de los Letrados de la Administración de Justicia quienes tienden a afirmar que su figura forma parte integrante de los órganos jurisdiccionales, junto con los Jueces y Magistrados.¹⁶

Para argumentar esta opinión, definen el órgano jurisdiccional como un entramado complejo en el cual se produce la división del trabajo en cuatro vías fundamentales¹⁷:

- Por un lado, la decisión sustantiva (ius dicere) que está atribuida en exclusiva al juzgador.
- También la función de documentación (fe pública judicial) que, como sabemos, está, de forma exclusiva, en manos del Letrado de la Administración de Justicia.

¹⁵ ASENCIO MELLADO, J.M., *Algunas reflexiones sobre la nueva oficina judicial y los secretarios judiciales*, El notario del siglo XXI, Madrid, Colegio Notarial de Madrid, 2009, noviembre-diciembre, núm. 28.

¹⁶ SEOANE CACHARRÓN, J., *El Secretario Judicial ante la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de Reforma de la Legislación Procesal (civil y penal) para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial*, Diario de la Ley, nº1756, 2011, p. 3.

¹⁷ FONT DE MORA, J., ARRIBAS Y ATIENZA, P., DE LA LUZ LOZANO, M., *Propuesta de modificación del artículo 102 bis apartado 2.º LJCA 29/1998 de 13 de julio para cumplimiento de la STC 58/2016, de 17 de marzo*. Diario La Ley, Nº 8797, 2016, p. 2.

- En tercer lugar, está la ordenación procesal, compartida entre Juez y Letrado de la Administración de Justicia, con mayor participación por este último.
- Por último, la ejecución de lo resuelto, también compartida entre Juez y Letrado de la Administración de Justicia y también con mayor participación por este último.

Por tanto, para ellos es coherente pensar que el Letrado de la Administración de Justicia tiene atribuidas ciertas competencias que participan del ejercicio de la potestad jurisdiccional.

Introducido y tratado el debate en torno a la función jurisdiccional de las competencias atribuidas al Letrado de la Administración de Justicia, no se debe olvidar que son tres los puntos que han hecho que exista una mayor controversia con respecto a este tema. Por un lado, la llevanza de la agenda de señalamientos, una función que puede parecer de índole menor, pero que ha sido el detonante para que tenga lugar el debate explicado anteriormente. En segundo lugar, la admisión e inadmisión de la demanda, por su incidencia en el acceso a la justicia. Por último, la posibilidad de los Letrados de la Administración de Justicia de dictar resoluciones sin posterior recurso, lo que parece ir en contra del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 CE.

1. AGENDA DE SEÑALAMIENTOS

En mi juicio se trata de una cuestión menor pero que ha suscitado un gran malestar en el seno de Jueces y Magistrados, tanto es así que ha llegado a ser elevada en forma de autocuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, como veremos posteriormente con la STS de 17 de marzo de 2016¹⁸.

La agenda de señalamientos no hace referencia más que a la actividad tendente a coordinar la carga laboral de un todo, en este caso Juzgados y Tribunales. Pero, el hecho de que la reforma de la LEC recoja, en su artículo 182 LEC, que el señalamiento de las vista se realizará por el Letrado de la Administración de Justicia teniendo en cuenta igualmente el número de señalamientos y las indicaciones y criterios de carácter general y, en particular, sobre la duración estimada de los actos a señalar que le hayan sido proporcionados por el titular del correspondiente órgano judicial, ha hecho que se

¹⁸ STC 58/2016, de 17 de marzo

produzcan numerosos intentos por parte de los Jueces para demostrar la creación de una quiebra de independencia judicial.

Los integrantes del Cuerpo Judicial defienden que, en ningún caso, la organización de la oficina judicial debe restringir la real y efectiva independencia judicial, conservando los jueces la facultad de señalar los juicios y vistas¹⁹. Pero hay que recordar que la independencia judicial no es un derecho subjetivo de los miembros de la carrera judicial, sino una cualidad del sistema por lo que la independencia judicial garantiza una decisión imparcial y, con ello, la tutela judicial efectiva que, este sí, es un derecho constitucional de todos los ciudadanos.

Además, como ya se ha podido deducir, la agenda de señalamientos se trata de una actuación reglada que tiene unos criterios establecidos (disponibilidad de Sala, horas de audiencia, número de señalamientos...) y, además, se debe hacer, como dice el propio preámbulo de la Ley 13/2009, teniendo en cuenta los criterios del Presidente de la Sala o Sección o el titular del órgano judicial.

Así pues, a falta de que los jueces justifiquen más detalladamente la pérdida de independencia que alegan, no parece coherente todo este debate que se ha abierto ante el hecho de que sean los Letrados de la Administración de Justicia quien lleve a cabo la agenda de señalamientos en aras de cumplir con la premisa primera de la nueva oficina judicial: agilizar y mejorar la Justicia.

Sin embargo, la atribución de esta competencia que, en mi opinión, se puede entender como de carácter organizativo, ha sido el detonante para que se abra el debate de si algunas de sus nuevas funciones puede entrar en conflicto con dos premisas tan importantes de nuestro derecho como es el propio derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de exclusividad de la potestad jurisdiccional debido a la intervención judicial en la revisión de las diligencias de ordenación dictadas por el Letrado de la Administración de Justicia.

Tanto es así que ello desembocó en una cuestión interna de inconstitucionalidad planteada en relación al artículo 102 bis.2 de la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, añadido por la Ley 13/2009.

¹⁹ Propuesta Normativa las Asociaciones de Jueces contra la agenda de señalamientos

Los hechos del caso concreto son los siguientes: El 10 de diciembre de 2010 se presenta ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid demanda contra resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid de 22 de septiembre de 2010, por la que se decretaba expulsión del territorio nacional.

Por decreto del Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado, a fecha de 25 de abril de 2011, se acordó la admisión a trámite de la demanda contencioso-administrativa y, por diligencia de ordenación de esa misma fecha, se señaló para la celebración del juicio oral el 22 de abril de 2014. Por ello, el recurrente interpuso recurso de reposición contra la diligencia de ordenación, al entender que lo dilatado del plazo de señalamiento para la vista vulnera su derecho a un proceso sin dilaciones indebidas recogido en el artículo 24.2 CE. Sin embargo, dicho recurso fue desestimado por decreto del Letrado de la Administración de Justicia el 26 de mayo de 2011, que confirmó la diligencia recurrida en todos sus extremos.

Se interpone recurso de amparo y la Sala Segunda acuerda elevar al Pleno del Tribunal cuestión interna de inconstitucionalidad respecto del art. 102 bis.2 LJCA por oposición al art. 24.1 CE, que se centra en las funciones del Letrado de la Administración de Justicia tras la reforma de la legislación procesal con argumentos a favor y en contra relativos al papel del mismo en la función jurisdiccional.

Como se puede deducir y, como se explicará más adelante, el debate de fondo es determinar si la posibilidad de que los Letrados de la Administración de Justicia enjuicien las lesiones de derechos fundamentales que puedan ocasionar sus resoluciones (postura que podría entenderse contraria a la Constitución, dada la exclusividad de ejercicio de la potestad jurisdiccional por Jueces y Tribunales, en virtud del artículo 117.3 CE) debe ser eliminada o no.

Es decir, como defiende Cremades López de Teruel²⁰, si bien el derecho que se dice vulnerado es el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas (artículo 24.2 CE), la línea argumentativa aparece condicionada al entendimiento de que se han agotado todos los medios de impugnación jurisdiccionales previstos por las normas procesales para el caso concreto y que la violación de derechos que se invoca es imputable a una acción u omisión del órgano judicial. Por tanto, esta línea argumentativa, determina que

²⁰ CREMADES LÓPEZ DE TERUEL, F.J., *La naturaleza de la cosa: reflexiones y consideraciones a propósito de la reciente sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 17 de marzo de 2016*, Diario de la Ley Nº 8753, 2016, p. 2.

se esté recurriendo en amparo un acto de órgano judicial que, sin embargo, no emana del titular del mismo, sino por el Letrado de la Administración de Justicia, lo que ciertamente plantea una situación problemática en cuanto a su encaje en el amparo contra los actos judiciales a que se refiere el artículo 44 LOTC.

Ello entiende también Banacloche Palao²¹, quien destaca que lo que realmente dilucida la Sentencia del Tribunal Constitucional 58/2016 es si cabe que una decisión adoptada por el Letrado de la Administración de Justicia no pueda ser revisada por un Juez y que la cuestión de inconstitucionalidad se plantea ante la sorpresa de que se pueda interponer un recurso de amparo contra una decisión que no sea de un Juez o Tribunal.

En cualquier caso, antes de entrar en ello, me parece importante dar a conocer la opinión que tienen los Letrados de la Administración de Justicia con respecto a la necesidad de sometimiento a control judicial de sus señalamientos²². Defienden, en primer lugar, que fue decisión tomada del gobierno la de atribuir el control de los señalamientos a los Letrados de la Administración de Justicia para dar seriedad a la agenda y convertirla en más transparente y ordenada y que no fue pedida o exigida por ellos.

Por otro lado, esgrimen que se trata de una función regulada en el artículo 182 LEC, lo que hace que los señalamientos se realicen siguiendo el orden de la agenda del Juzgado, ya frecuentemente electrónica, siguiendo las instrucciones dadas por el juez, quien puede y debe comprobar que se cumplen las mismas y dejando en manos del juez el control de los señalamientos antes y después de realizarlo.

Por tanto, en su opinión, de existir indefensión, la misma es de la agenda, la agenda es del juez, y el juez puede revisar si los señalamientos se están realizando aplicando bien o mal sus instrucciones, generales o particulares. Defienden, entonces, que no hay que revisar la labor del Letrado de la Administración de Justicia, sino las propias instrucciones del Juez con las que se elabora la agenda.

2. ADMISIÓN E INADMISIÓN DE DEMANDAS

²¹ BANACLOCHE PALAO, J., *Todas las resoluciones de los Letrados de la Administración de justicia son revisables en todas las jurisdicciones*, Diario de la Ley Nº 8779, 2016, p. 3.

²² Comisión de Estudios e Informes. Ilustre Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia. *Consecuencias de la sentencia del TD de 17 de marzo de 2016, para el desarrollo de las funciones de los letrados de la administración de justicia y la puesta en marcha de la oficina judicial*. Abril 2016, p. 9.

Un segundo punto de conflicto ha sido la posibilidad por parte del Letrado de la Administración de Justicia de admitir la demanda, actuación que se considera reglada por el artículo 404.1 LEC (ya explicada anteriormente) y que da lugar a que se dicte el pertinente decreto para admitirla.

En torno a esta actuación es uno el principal foco de crítica: la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva recogido el artículo 24 de la CE ya que la decisión la lleva a cabo el Letrado de la Administración de Justicia y no el Juez. A partir de esta consideración, más concretamente, se plantea si vulnera el acceso a la justicia, recogido en el derecho a la tutela judicial efectiva citado previamente.

Al respecto, hay que decir que, por lo común, las demandas sólo exigen la comprobación de ciertos requisitos y el examen de la jurisdicción y competencia objetiva y territorial y, además, la indebida admisión de la demanda puede corregirse finalmente por el órgano judicial. Otra situación diferente es la decisión sobre inadmisión de la demanda, pues entonces sí que entra en juego el derecho de acceso a la justicia que, como es sabido, forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24 CE) y, por tanto, exige un pronunciamiento judicial. Sin embargo, esta función no se ha trasladado al Letrado de la Administración de Justicia²³.

Sin embargo, en sentido contrario, y para argumentar las posibles consecuencias negativas que tiene esta actuación por parte del Letrado de la Administración de Justicia, hay quien entiende, como Vicente Giemo Sendra²⁴, que una admisión indebida de la demanda por su parte puede ocasionar considerables perjuicios materiales (sobre todo, si se han adoptado medidas cautelares) y no pocas dilaciones indebidas, máxime si el demandado no ejercitara aquella carga procesal y la ausencia de dichos presupuestos se apreciara, por tanto, en la comparecencia previa. Es decir, otro derecho (el de un proceso sin dilaciones indebidas) que se podría ver afectado.

A este respecto, creo oportuno resaltar y repetir que los Letrados de la Administración de Justicia forman parte de un Cuerpo Superior altamente cualificado y, en la actualidad, ostentan la figura de director técnico procesal tal y como recoge el artículo 8 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, por lo

²³ LUJÁN ALCÁRAZ, J., *Novedades en la admisión de la demanda*, Legal Today, 2010, p. 1.

²⁴ GIMENO SENDRA, V., *Análisis crítico del proyecto de Ley de implantación de la Oficina Judicial*, Diario La Ley, Nº 7203, 2009, p. 3.

que difícilmente una mayor atribución de competencias procesales a un director puede suponer una reducción de garantías para el ciudadano.

3. POSIBILIDAD DE DICTAR RESOLUCIONES SIN POSTERIOR RECURSOS

Aspecto cuestionado desde diferentes ámbitos, en gran medida, el judicial. Una primera crítica proviene de la idea de que las resoluciones del Letrado de Administración de Justicia van a carecer de la independencia plena de la que sí gozan las resoluciones del Juez independiente por ley, al ser el Cuerpo de los Letrados de la Administración de Justicia un cuerpo jerarquizado²⁵.

En mi opinión, no cabe prestar demasiada atención a dicha posición ya que existen razones suficientes para confiar en la independencia de los integrantes de este Cuerpo Superior Jurídico de igual forma que en los Jueces y Magistrados.

Por un lado, hay que constatar que es cierto que el Cuerpo de los Letrados de la Administración de Justicia está jerarquizado, pero también hay que poner en relieve que dicha jerarquización es solo en materia puramente gubernativa, como lo recoge la propia LOPJ en su artículo 465.8 al establecer que *«tampoco el Secretario de Gobierno podrá impartir instrucciones particulares relativas a asuntos concretos en los que un secretario judicial intervenga en calidad de fedatario o en el ejercicio de sus competencias de ordenación y dirección del proceso»*.

Por otro, es importante decir que dicha independencia la recoge el propio Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales en su artículo 3 al destacar que *«actuarán con sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad, así como con autonomía e independencia»*. En este punto, hay que decir que el cuerpo de los Letrados de la Administración de Justicia no tiene estatuto de inamovilidad, lo que puede suscitar ciertas dudas al respecto. En cualquier caso, entiendo que existen razones suficientes para confiar en la no dependencia de los Letrados de la Administración de Justicia a la hora de dictar resoluciones en distintas numerosas materias.

Sin embargo, en mi opinión, que este sea un punto controvertido no es por la falta de independencia de los Letrados de la Administración de Justicia, sino por el hecho de que,

²⁵ GUTIÉRREZ LUCAS, C.E., *Las nuevas funciones judiciales tras las reformas procesales derivadas de la nueva oficina judicial*, Revista Jurídica de Castilla y León, N°21, 2010, p. 98.

con las nuevas competencias que les han sido atribuidas se pueda poner en peligro el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE) y con el principio de exclusividad de la potestad jurisdiccional, o principio de reserva de jurisdicción²⁶.

Por tanto, este punto también se puede relacionar con la sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de marzo de 2016 ya que, como se ha dicho en el apartado relativo a la agenda de señalamientos, el fondo que se debate en la misma es determinar si la previsión contenida en el primer párrafo del artículo 102 bis.2 LJCA es compatible con el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión que garantiza el artículo 24.1 CE y con el principio de exclusividad de la potestad jurisdiccional del artículo 117.3 CE.

Según los fundamentos de derecho de la propia sentencia, no puede merecer reproche de inconstitucionalidad alguno la opción tomada por el legislador (en el marco del modelo de oficina judicial que diseñó la LO 19/2003, desarrolló la Ley 13/2009 y reafirma la reciente LO 7/2015) de distribuir la toma de decisiones de un proceso entre Jueces y Magistrados, por un lado, y Letrados de la Administración de Justicia, por otro.

El Tribunal Constitucional determina que se reserva a los primeros, como es obligado, las decisiones procesales que puedan afectar a la función o potestad estrictamente jurisdiccional, que les viene constitucionalmente reservada en exclusiva en el artículo 117.3 CE, y se atribuye a los segundos, aquellas funciones que no tienen carácter jurisdiccional, lo que incluye el dictado de resoluciones procesales que no tengan este carácter.

A este respecto, Seoane Cacharrón²⁷ alega que el Tribunal Constitucional, hace una lectura novedosa del artículo 117.3 CE, al decir que la potestad jurisdiccional corresponde en exclusiva a los Jueces y Tribunales ya que, en consonancia con lo dicho anteriormente, defiende que dicho precepto establece que la potestad jurisdiccional corresponde a los juzgados y tribunales, entendiendo que la reserva del llamado núcleo duro de la jurisdicción a favor de Jueces y Tribunales está en el apartado 1 del artículo y no en el 3 que comprende esa función y además las de documentación, ordenación y ejecución que se atribuyen al Letrado de la Administración de Justicia como integrante del órgano jurisdiccional.

²⁶ STC 181/2000, de 29 de junio, FJ 19

²⁷ SEOANE CACHARRÓN, J., *La STC Pleno 17 de marzo de 2016 devalúa al Letrado de la Administración de Justicia y allana el camino a un proceso inquisitivo*, Diario de la Ley, Nº 8752, 2016, p. 1.

Por otro lado, otro de los objetivos de la reforma una vez implantada la nueva oficina judicial era garantizar que toda resolución del Letrado de la Administración de Justicia pudiera ser sometida al control del Juez o Tribunal, aspecto que aparecía como una exigencia ineludible del derecho a la tutela judicial efectiva garantizado por el artículo 24.1 CE. Para ello, el legislador ha establecido un método de control judicial tanto de modo directo, a través del recurso de revisión contra los decretos del Letrado de la Administración de Justicia que pongan fin al proceso o impidan su continuación (art. 454 bis.1 LEC, párrafo segundo, y el propio artículo 102 bis.2 LJCA cuestionado, que viene a reproducirlo) como, indirecto, en el caso de los decretos del Letrado de la Administración de Justicia resolutivos de la reposición, cuyo objeto, aun no siendo recurrible en revisión ante el Juez o Tribunal, puede ser sometido a la consideración del Juez o Tribunal dentro del proceso.

Por tanto, el problema que se plantea en la presente cuestión interna reside en que no es descartable que existan supuestos en los que la decisión del Letrado de la Administración de Justicia excluida por el legislador del recurso de revisión ante el Juez o Tribunal (párrafo primero del artículo 102 bis.2 LJCA: *«contra el decreto resolutivo de la reposición no se dará recurso alguno, sin perjuicio de reproducir la cuestión al recurrir, si fuere procedente, la resolución definitiva»*), concierna a cuestiones relevantes en el marco del proceso, que atañen a la función jurisdiccional reservada en exclusiva a Jueces y Magistrados (artículo 117.3 CE), a quienes compete dispensar la tutela judicial efectiva sin indefensión que a todos garantiza el artículo 24.1 CE.

El citado precepto parece entrar en contradicción con lo expuesto en los párrafos anteriores y, según el Tribunal Constitucional, la declaración de nulidad del artículo 240.2 LOPJ y el incidente de nulidad de actuaciones del artículo 241 LOPJ no serían remedios válidos para solucionar la situación, por lo que el Tribunal Constitucional decide declarar la inconstitucionalidad y nulidad del primer párrafo del artículo 102 bis.2 LJCA ya que se crea un espacio de inmunidad jurisdiccional incompatible con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y la reserva de jurisdicción a los Jueces y Tribunales, limitando el derecho del justiciable a someter a la decisión última del Juez o Tribunal la resolución de una cuestión que atañe a sus derechos e intereses y legítimos, pudiendo afectar incluso a un derecho fundamental como es el de un proceso sin dilaciones indebidas.

Es decir, como apunta García de la Rosa²⁸, el Tribunal Constitucional recoge una cierta crítica en cuanto a la configuración restrictiva del control jurisdiccional sobre el proceso, lo que lleva aparejado la incorporación de una nueva concepción ampliada en el ejercicio de funciones revisoras del Juez a extender con carácter general sobre las decisiones procesales del Letrado de la Administración de Justicia, que en mayor o menor medida incidan en el derecho del justiciable.

Según, Banacloche Palao²⁹, esta problemática de que existan ciertas decisiones de los Letrados de la Administración de Justicia que no estén bajo control de un Juez radica en la búsqueda de un paralelismo entre la regulación para la implantación de la nueva oficina judicial y la existente anteriormente. Se estableció que, si antes se dictaba una providencia, ahora una diligencia de ordenación y que lo que antes era un auto, ahora sería un decreto.

Por tanto, el sistema de recursos también debía ser similar, es decir, si para las providencias y autos no definitivos sólo estaba previsto un recurso de reposición, para las diligencias y decretos no definitivos debía establecerse el mismo sistema: reposición ante quien dictó el acto impugnado, el propio Letrado de la Administración de Justicia.

A este respecto, al igual que ha ocurrido con respecto al revuelo creado como consecuencia de la llevanza de la agenda de señalamientos por parte de los Letrados de la Administración de Justicia, los mismos se han pronunciado conjuntamente³⁰ para dar su opinión sobre el debate relativo al límite y la extensión del sistema de recursos contra sus resoluciones que se suscitó a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional, de 17 de marzo, que se ha ido explicando a lo largo de la segunda parte del presente trabajo.

A este respecto, están de acuerdo que no sería coherente abogar por la imposibilidad de recurrir (ilógico a todas luces) y estiman que lo importante es ofrecer a los usuarios de la Justicia medios que posibiliten el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva entendiendo que no se pueden ofrecer medios indiscriminados que obstaculicen la

²⁸ GARCÍA DE LA ROSA, C., *El control jurisdiccional de las resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia: comentario a la STC de 17 de marzo de 2016*, Diario de la Ley Nº 8765, 2016, p. 2.

²⁹ BANACLOCHE PALAO, J., *Todas las resoluciones de los Letrados de la Administración de justicia son revisables en todas las jurisdicciones*, Diario de la Ley Nº 8779, 2016, p. 2.

³⁰ Comisión de Estudios e Informes. Ilustre Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia. *Consecuencias de la sentencia del TD de 17 de marzo de 2016, para el desarrollo de las funciones de los letrados de la administración de justicia y la puesta en marcha de la oficina judicial*. Abril 2016, pp. 14 y 23.

tramitación de forma innecesaria. Es por ello, por lo que el artículo 456.4 LOPJ establece que *«las diligencias de ordenación y los decretos serán recurribles en los casos y formas previstos en las leyes procesales»*.

Partiendo de aquí, y en términos generales, entienden que el recurso es un acto procesal de parte, por lo que, en ningún caso puede hablarse de revisión directa del Juez de las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia

Defienden que, frente a las resoluciones interlocutorias cabe recurso de reposición, frente a las de fondo apelación o revisión, por lo que no es correcto hablar de revisión cuando estamos ante resoluciones interlocutorias. Además, estiman que la naturaleza de la resolución de admisión de la demanda no es definitiva y, por ello, frente a ella cabe recurso de reposición, no de revisión. Finalmente, ponen de relieve que la LEC regula con precisión como se debe reaccionar frente a la resolución del Letrados de la Administración de Justicia desestimatoria del recurso de reposición, para lograr que pueda ser “revisada”.

Por su parte, en la citada sentencia, el propio TC condiciona la declaración de inconstitucionalidad a la imposibilidad de revisión judicial en el proceso contencioso administrativo. Sin embargo, esto solo ocurre en nuestro ordenamiento procesal en el precepto cuestionado que solo permite alegar y poner de manifiesto estas circunstancias al recurrir la sentencia, dándose la circunstancia de que hay sentencias no recurribles en la jurisdicción contenciosa.

Para solucionar esta situación, según el Ilustre Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, se debería considerar aplicable de forma supletoria la LEC, y en concreto el artículo 454 bis que es el que ofrece la solución a las cuestiones planteadas, directamente en la jurisdicción civil, y supletoriamente en el resto. Con ello, el problema se podría resolver en la propia sentencia, si efectivamente se ha tomado una decisión por el Letrado de la Administración de Justicia que pueda ser contraria a la Ley.

V. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES

El descontento con la Administración de Justicia de los profesionales por el mal funcionamiento de la misma, la escasez de medios personales y materiales, el incremento de la carga de trabajo, así como el malestar de los ciudadanos hacia la Justicia ha hecho que en los últimos años se hayan tomado las medidas necesarias y realizado las reformas

pertinentes para que se produzca una correcta implantación de una nueva oficina judicial con la finalidad de que la Justicia actúe con rapidez, eficacia, y calidad, con métodos más modernos y procedimientos menos complejos cumpliendo satisfactoriamente su función constitucional de garantizar en tiempo razonable los derechos de los ciudadanos y de proporcionar seguridad jurídica, bajo pautas de comportamiento y decisión previsibles.

Para ello, el legislador dictó, entre otras, la LO 19/2003 de modificación de la Ley Orgánica 8/1985 del Poder Judicial y la Ley 13/2009 de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial. Un punto importante de la reforma fue la atribución de nuevas competencias procesales a los Letrados de la Administración de Justicia con la finalidad de descargar a los Jueces y Magistrados de todas aquellas tareas no vinculadas estrictamente a las funciones constitucionales para que dediquen todos sus esfuerzos a sus funciones principales: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

Por tanto, además de las funciones que ya llevaban a cabo con anterioridad a la reforma (como titulares de la fe pública judicial, las de carácter jurídico procesales, las de técnico procesales o su actuación como directores de la oficina judicial), los Letrados de la Administración de Justicia pasan a ostentar otras competencias que hasta entonces residían, en su mayoría, en manos de los Jueces y Magistrados, tanto en materia civil (admisión de la demanda, decisiones que acogen actos dispositivos de las partes, despacho de ejecución, medidas ejecutivas, cuestiones incidentales, terminación del proceso de ejecución, vía de apremio,...) como penal (comunicación y gestión procesal, nuevas facultades en el proceso penal, ejecuciones y embargos,...)

Fruto de ello, se ha suscitado un intenso debate acerca de su participación o no de los en la potestad jurisdiccional, como consecuencia de pasar a ostentar funciones que han sido muy controvertidas como la llevanza de la agenda de señalamientos, la admisión e inadmisión de la demanda o la posibilidad de dictar resolución sin posterior recurso.

En cuanto a sí ostentan funciones relacionadas con la potestad jurisdiccional, parece necesario reseñar que, si bien hay quien defiende que dicha potestad es exclusiva de Jueces y Magistrados (artículo 117.3 CE), la potestad jurisdiccional no solo abarca la función decisoria, sino que se descompone en potestad de decisión de controversias, de ejecución, de documentación y de ordenación, de las cuales solo la primera reside en los Jueces y Magistrados (artículo 117.1 CE) con exclusividad absoluta, ya que la potestad jurisdiccional es otorgada con acertado criterio por el legislador constitucional a los

Juzgados y Tribunales y no a los Jueces y Magistrados habida cuenta que el Tribunal es complejo y compuesto por el Juez y el Letrado de la Administración de Justicia.

Como se ha detallado, la llevanza de la agenda de señalamientos por parte del Letrado de la Administración de Justicia ha suscitado un gran malestar en el seno judicial, lo que ha hecho que haya llegado a ser elevada en forma de cuestión interna de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional como se ha detallado en la segunda mitad del trabajo. A este respecto, entiendo que no es más que una tarea organizativa que está reglada en la LEC con unos criterios establecidos (disponibilidad de Sala, horas de audiencia, número de señalamientos...) que se ha de realizar según las instrucciones e indicaciones del titular del órgano judicial, por lo que no alcanzo a comprender tal revuelo.

También ha sido debatida la atribución a los Letrados de la Administración de Justicia de la competencia para admitir la demanda ya que pudiera vulnerarse el derecho al acceso a la justicia. A este respecto, hay que reseñar que solo se ha transferido la potestad para admitir demandas. Situación diferente sería la decisión sobre inadmisión de la demanda, pues entonces sí que entra en juego el derecho de acceso a la justicia que forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24 CE) y, por tanto, exige un pronunciamiento judicial.

Por último, hay que destacar que otro de los objetivos de la reforma de la nueva oficina judicial era garantizar que toda resolución del Letrado de la Administración de Justicia pudiera ser sometida al control del Juez o Tribunal. Situación que, como se ha visto en el caso que da lugar a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de marzo de 2016 no ocurre, por lo que son varios los autores que se han pronunciado al respecto. Uno de ellos es, Banacloche Palao³¹, quien estima que esta situación tiene su raíz en el intento de paralelismo entre la anterior regulación y la vigente, al intentar que el sistema de recursos también fuese similar, es decir, si para las providencias y autos no definitivos sólo estaba previsto un recurso de reposición, para las diligencias y decretos no definitivos debía establecerse el mismo sistema: reposición ante quien dictó el acto impugnado, el propio Letrado de la Administración de Justicia. Sin embargo, si se realiza un estudio exhaustivo y, como afirma el citado autor, se puede defender que todas las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia son revisables.

³¹ BANACLOCHE PALAO, J., *Todas las resoluciones de los Letrados de la Administración de justicia son revisables en todas las jurisdicciones*, Diario de la Ley Nº 8779, 2016, p. 2.

VI. BIBLIOGRAFÍA

ARTÍCULOS Y LIBROS

- ESTARÁN PEIX, J.A., *El nombre de marras: De Secretarios a Letrados*, 2015.
- MARTÍNEZ PARDO, V.J., *La Nueva Oficina Judicial*, Revista Internauta de Práctica Jurídica, Núm 25, 2010, pp. 1-17.
- MARTÍNEZ DE SANTOS, A., *Dos caminos paralelos que se confunden: la reforma procesal y la de la Oficina Judicial*, Diario de la Ley, Nº 7457, 2010.
- GARRIDO CARRILLO, F., *Claves de la modernización de la justicia en España*, Agenda Internacional. Año XIV, Nº25, 2007, pp. 249-280.
- MOLINER, M., *Diccionario de uso del español*. Edición abreviada, Gredos, Madrid, 2008
- SEOANE CACHARRÓN, J., *El Secretario Judicial ante la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de Reforma de la Legislación Procesal (civil y penal) para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial*, Diario La Ley, Nº 7561, Sección Tribuna, 3 Feb. 2011.
- MORENO CATENA, V., *Introducción al Derecho Procesal*. 4ª Edición. 2003.
- GIMENO SENDRA, V., *Análisis crítico del proyecto de Ley de implantación de la Oficina Judicial*, Diario La Ley, Nº 7203, Sección Corresponsalía, 24 Jun 2009.
- ASECIO MELLADO, J.M., *Algunas reflexiones sobre la nueva oficina judicial y los secretarios judiciales*, El notario del siglo xxi, Madrid, Colegio Notarial de Madrid, 2009, noviembre-diciembre, núm. 28.
- FONT DE MORA, J., ARRIBAS Y ATIENZA, P., DE LA LUZ LOZANO, M., *Propuesta de modificación del artículo 102 bis apartado 2.º LJCA 29/1998 de 13 de julio para cumplimiento de la STC 58/2016, de 17 de marzo*. Diario La Ley, Nº 8797, 2016.
- CREMADES LÓPEZ DE TERUEL, F.J., *La naturaleza de la cosa: reflexiones y consideraciones a propósito de la reciente sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 17 de marzo de 2016*, Diario de la Ley Nº 8753, 2016, p. 2.
- BANACLOCHE PALAO, J., *Todas las resoluciones de los Letrados de la Administración de justicia son revisables en todas las jurisdicciones*, Diario de la Ley Nº 8779, 2016, p. 3.

- LUJÁN ALCÁRAZ, J., *Novedades en la admisión de la demanda*, Legal Today, 2010.
- GUTIÉRREZ LUCAS, C.E., *Las nuevas funciones judiciales tras las reformas procesales derivadas de la nueva oficina judicial*, Revista Jurídica de Castilla y León, Nº21, 2010.
- SEOANE CACHARRÓN, J., *La STC Pleno 17 de marzo de 2016 devalúa al Letrado de la Administración de Justicia y allana el camino a un proceso inquisitivo*, Diario de la Ley, Nº 8752, 2016, p. 1.
- GARCÍA DE LA ROSA, C., *El control jurisdiccional de las resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia: comentario a la STC de 17 de marzo de 2016*, Diario de la Ley Nº 8765, 2016, p. 2.

NORMATIVA

- Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
- Ley Orgánica de 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial
- Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
- Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
- Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial
- Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

JURISPRUDENCIA

- Sentencia del Tribunal Constitucional, 58/2016, de 17 de marzo de 2016
- Sentencia del Tribunal Constitucional, 181/2000, de 29 de junio de 2000

INFORMES

- Comisión de Estudios e Informes. Ilustre Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia. Consecuencias de la sentencia del TD de 17 de marzo de

2016, para el desarrollo de las funciones de los letrados de la administración de justicia y la puesta en marcha de la oficina judicial. Abril 2016.

- El Pacto de Estado para la reforma de la Justicia, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2002, pp. 273-282
- Propuesta Normativa las Asociaciones de Jueces contra la agenda de señalamientos